

to valuador de la cosa embargada, y de que se fijasen días para las almonedas, verificándose una de ellas: que aunque la finca embargada se halle en jurisdicción de Apam, la acción que se ejercita en juicio es personal y no real; y que concurriendo el fuero del domicilio y el de la ubicación de la cosa, es preferente el primero, así como que cuando concurren dos fueros diversos, toca al autor elegir entre ellos; de conformidad con lo dispuesto en la ley citada, con la Doctrina de Peña y Peña Lec. de práctica forense, tomo 2º núm. 201 y siguientes, y con lo pedido por el C. Fiscal, se declara:

Primero: que el Juez 2º del ramo de lo civil de esta ciudad, es competente para seguir conociendo del juicio indicado.

Segundo: que no hay condenación de costas.

Tercero: que se remita copia de esta sentencia, á cada uno de los Jueces contendientes, para los efectos que corresponden haciéndose saber y archivándose á su vez el Toca.

Así lo mandaron por unanimidad de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron la 1ª sala de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados).—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*J. M. Lafra-gua.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Auza.*—*Luis M. Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Mayo treinta de mil ochocientos setenta y uno.

AMPARO.

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan, por Dª Demetria Almeida, contra el C. Gobernador del Estado, que mandó juzgar militarmente á su esposo, C. José Asuncion Lara.

PEDIMENTO DEL C. PROMOTOR FISCAL.

C. Juez de Distrito.

Doña Demetria Almeida, en nombre y

representación de su esposo D. José Asuncion Lara, pretende que V. ampare y proteja á éste contra el acto del ejecutivo del Estado, que lo tiene preso é incomunicado por presunciones de haber dado fuego á unos cohetes, en la plaza principal de esta ciudad, la noche del diez del corriente.

A la fecha en que se presentó el recurso de amparo, según lo que en él mismo se expresa, el individuo á cuyo favor se interpone, aun solo hacia dos días que se hallaba preso; por consiguiente, no podía decirse violada en él la garantía que otorga el artículo 19 de la Constitución que previene que ninguna detención exceda de tres días, sin que se justifique con un auto motivado de prisión y los demás requisitos que establezca la ley. No existiendo, pues, la violación de esta garantía que era en lo que podía consistir el fundamento legal del amparo, conforme á la ley de 29 de Enero de 1869; y estando sujeto D. José Asuncion Lara, en cuyo nombre se invoca, á un procedimiento criminal, según la comunicación informativa del C. Gobernador, contra quien se reclama el acto, el fiscal es de opinión que no debe concederse, por improcedente, el recurso de que se trata; porque si como se asegura en el escrito en que se interpone, la autoridad que mantiene en prisión al Sr. Lara, no es competente para juzgar el delito que se le atribuye, esta cuestión podrá ser materia de una competencia, pero no de un amparo cuyo objeto está circunscrito á los tres únicos casos que expresa el artículo 1º de la citada ley orgánica de 20 de Enero, y de los cuales ninguno es aplicable al presente, pues mal podría decirse que la autoridad del Estado, por el hecho de estar siguiendo el indicado procedimiento, invade la esfera de la federal, cuando primero debería decidirse de parte de quién está la competencia, siempre que V., creyendo tenerla en el delito que motiva el juicio, quisiese sostenerla para conocer de él. Por estos fundamentos el fiscal concluye y pide que declare V. que la Justicia de la Unión:

no ampara ni protege á D. José Asuncion Lara contra los actos del C. Gobernador de este Estado que lo mandó reducir á prision, y en la cual hacia solo dos dias que se hallaba, cuando se interpuso este recurso, en méritos de la causa que se le instruye.

Mérida, Abril veintinueve de mil ochocientos setenta y uno.—*P. Higueros.*

Sentencia del Juez de Distrito

Mérida, Mayo ocho de mil ochocientos setenta y uno.

Visto este Juicio de amparo promovido por la Señora Doña Demetria Almeida de Lara, contra el C. Gobernador del Estado que ha mandado juzgar militarmente á su esposo C. José Asuncion Lara, conforme á la ley de 15 de Setiembre de 1871. Visto el informe del Gobierno del Estado que expresa estar comprendido el esposo de la quejosa en la fraccion 4ª del art. 2º de la citada ley. Visto el pedimento fiscal, con la citacion para sentencia; y considerando: que la fraccion 4ª art. 2º de la ley de 15 de Setiembre de 1857, previene que serán juzgados militarmente los delitos que á continuacion se expresan, aunque sean cometidos por paisanos: "Resistencia armada ó insultos á militares ocupados actual y patentemente en actos del servicio militar: atentado contra la seguridad de los campamentos y contra la existencia y seguridad de los cuarteles, almacenes y demás establecimientos militares: incendio ó robo de las cosas existentes en su recinto:" que dicha ley está en oposicion con el artículo 13 de la Constitucion federal que declara subsistente el fuero de guerra, solo para los delitos y faltas que tengan exacta conexion con la disciplina militar, pues mientras que segun el art. constitucional no mas que los militares pueden ser juzgados conforme á su fuero, porque ellos son los únicos que pueden cometer delitos y fal-

tas que tengan exacta conexion con la disciplina militar, la ley de 15 de Setiembre hace extensivo el fuero hasta á los paisanos, en la fraccion del artículo mencionado: que la oposicion de ambas leyes dimana, de que la que motiva el amparo no fué dada por el Congreso de la Union, sino por el Presidente sustituto Comonfort en uso de las facultades del art. 3º del Plan de Ayutla: que en consecuencia, aquella ley no es constitucional ni puede ser juzgado militarmente por ella el C. José Asuncion Lara siendo paisano, y mucho menos, cuando no consta que esté comprendido en ninguno de los casos de la fraccion y artículo citados de la ley de 15 de Setiembre de 1857: que por el art. 126 de la Constitucion, es esta la ley suprema de toda la Union: que la competencia á que se refiere el C. Fiscal es sin perjuicio del presente recurso. Por lo expuesto y conforme á la fraccion primera del art. 101 de la Constitucion de la República, la autoridad en nombre de los Supremos Poderes de la Union, falla: 1º Que ampara y protege al C. José Asuncion Lara contra los actos del C. Gobernador del Estado que lo ha mandado juzgar militarmente, con arreglo á la fraccion 4ª art. 2º de la ley de 15 de Setiembre de 1857. 2º Sáquese testimonio de este fallo para su publicacion; y elévense los autos á la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos mexicanos para su revision, como previenen los artículos 13 y 27 de la Suprema ley de veinte de Enero de mil ochocientos sesenta y nueve.—Notifíquese.—*L. Manzanilla.*—Ante mí: *José Anacleto Castillo.*

Ejecutoria de la Suprema Corte de Justicia.

México, Mayo veintisiete de mil ochocientos setenta y uno.

Visto el juicio de amparo promovido ante el Juez de Distrito de Yucatan por Dª

Demetria Almeida de Lara, contra los actos del Gobernador del Estado, en virtud de los cuales fué consignado su marido José Asuncion Lara á un jurado militar con arreglo á la ley de 15 de Setiembre de 1857, con lo cual cree la peticionaria que se han violado en la persona de su marido, las garantías que otorgan los artículos 13 y 14 de la Constitucion federal de la República. Vistas las constancias de autos, y considerando: que el delito de que se acusa al marido de la peticionaria y que ha dado motivo á la providencia del Gobierno de Yucatan, contra quien se solicita el amparo, no está comprendido entre los delitos del órden militar. Considerando: que el Gobernador de Yucatan al hacer la calificacion del delito, señalando el Tribunal que deba juzgar al quejoso, ha invadido una atribucion exclusiva de la autoridad judicial, violando con su providencia las garantías que otorga el artículo 13 de la carta fundamental de la República; con tales fundamentos se declara: que es de confirmarse y se confirma la sentencia pronunciada por el Juzgado de Distrito de Yucatan en su parte resolutive que mandó en nombre de los poderes de la Union, amparar y proteger al quejoso contra las providencias del Gobierno de ese Estado, á que se refiere el presente juicio.

Devuélvanse al Juzgado remitente sus actuaciones con testimonio de esta sentencia, publíquese y archívese á su vez el Toca.

Así lo decretaron por mayoría de votos los CC. Presidente y Ministros que formaron el Tribunal pleno de la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, y firmaron.—(Firmados).—*S. Lerdo de Tejada.*—*Pedro Ogazon.*—*Juan J. de la Garza.*—*José Arteaga.*—*J. M. Lafragua.*—*P. Ordaz.*—*Ignacio Ramirez.*—*M. Zavala.*—*José García Ramirez.*—*Luis María Aguilar*, secretario.

Son copias que certifico. México, Mayo treinta y uno de mil ochocientos setenta y uno.—*Agustín Peralta*, oficial mayor.

AMPARO

Juicio promovido ante el Juzgado de Distrito de Yucatan, por la Sociedad mercantil que gira bajo la razon social "E. Avila de Regil é hijo," contra el Tesorero general del Estado, por el cobro que le hace de patente de giro.

PEDIMENTO DEL CIUDADANO PROMOTOR
FISCAL.

C. Juez de Distrito:

El que suscribe llevando accidentalmente la voz fiscal en estas diligencias sobre amparo, pedido á V. por la sociedad mercantil establecida en esta capital bajo la razon social de "E. Avila de Regil é hijo," contra los actos del C. Tesorero general del Estado, por el cobro que le hace del derecho de patente de giro decretado en 30 de Marzo de 1863 por la II. Legislatura, cuya disposicion consideran dichos señores opuesta al artículo 112 de la Constitucion general; evacuando el traslado que V. previene, debe manifestar: que examinada la cuestion con la imparcialidad debida, entiende que no puede lógicamente deducirse que el poder legislativo del Estado haya invadido las atribuciones del Soberano Congreso Nacional, con la determinacion de que se trata, solo porque se fija en ella por base el valor de los derechos de importacion de los efectos para el pago del uno por ciento de patente de giro. Este es un impuesto local semejante á otros que existen en los demás Estados de la República, de que tienen necesidad para los gastos de su administracion interior, y para lo cual el pacto federativo les faculta. El C. Tesorero general del Estado en su informe relativo, dilucida con bastante claridad este punto, demostrando que la parte quejosa pretende desconocer el carácter y condiciones de ese impuesto, que lo hacen diferenciarse evidentemente del derecho de importacion señalada-